

Documentos de la

DEMOCRACIA

#11

*Protección de los Derechos
de las Minorías*

por

Tinsley Furbrough

We the People

Documentos de la

DEMOCRACIA

“Tengo el sueño de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la firmeza de su carácter”.

— Dr. Martin Luther King, Jr.

Discurso en la Marcha a Washington, agosto de 1963

Director Ejecutivo: George Clack / **Editor:** Melvin Urofsky
Director Administrativo: Paul Malamud. / **Director Artístico:** Thaddeus A. Miksinski, Jr.
Traducción: Angel Carlos González / **Composición Tipográfica:** Leticia Fonseca G.

ACERCA DEL AUTOR:

Tinsley E. Yarbrough es Profesor Distinguido de Artes y Ciencias e imparte ciencia política en la Universidad del Este de Carolina en Greenville, N.C. Es autor de libros sobre varios juristas, entre ellos el juez de la Corte Suprema Hugo L. Black y los dos magistrados (abuelo y nieto) de nombre John Marshall Harlan. Sus libros más recientes son: The Rehnquist Court and the Constitution (Oxford, 2000) y The Burger Court: Justices, Rulings and Legacy (ABC@CLIO, 2001).

Los forjadores de la Constitución de los Estados Unidos dejaron que las generaciones futuras resolvieran el problema de la esclavitud y, por otra parte, la Guerra Civil y la Reconstrucción brindaron sólo un alivio temporal de la discriminación racial contra los ex esclavos y su descendencia. Sin embargo, a mediados de la década de 1950, la Corte Suprema de la república ya había empezado a someter a un estricto escrutinio judicial las leyes que implicaban discriminación por causa de la raza, el color o el origen nacional de las personas y prohibió prácticamente todas las formas de discriminación racial basadas en la discapacidad.

También el Congreso empezó a proscribir la discriminación racial pública y privada en los rubros de sufragio, empleo, alojamiento público, vivienda y programas pagados con fondos federales. Más tarde, ese alto tribunal sometió además a un mayor escrutinio las leyes basadas en el género, al tiempo que el Congreso no sólo proscribió la discriminación por motivos de género en los más diversos rubros, sino también cualquier desigualdad en el trato a la gente que padece de alguna discapacidad.

Los debates sobre la expansión de los conceptos en torno a la igualdad figuran entre los episodios más dolorosos, pero profundos, de la historia de los Estados Unidos. Con la posible excepción de las sociedades más homogéneas, el trato justo a las minorías es una de las responsabilidades más fundamentales y difíciles de un país. No hay forma en que una sociedad pueda tratar a todas las personas en forma idéntica y cumpla, al mismo tiempo, con sus funciones legítimas. Los gobiernos están obligados a establecer con regularidad los límites de sus leyes, dividiendo o clasificando a la población en grupos separados y tratando a los miembros de un grupo en forma más o menos favorable que a los de otro. Las tasas tributarias que varían según el nivel de ingresos, lo mismo que los requisitos sobre la edad mínima para votar u obtener el permiso para conducir un automóvil, son ejemplos ordinarios de estos reglamentos. Se estima que este tipo de clasificación es legítimo

mientras esté al servicio de intereses sociales importantes y se apege a la ley, y es razonable esperar que los ciudadanos obedezcan esas disposiciones.

En cambio, las políticas que establecen diferencias entre los grupos de personas por causas de raza, origen nacional, antecedentes étnicos, género, credo religioso u otros factores por el estilo, parecen ser irrelevantes, en sí mismas, para las metas de gobierno que la gente razonable considera legítimas. Cuando los gobiernos tratan a unas personas en forma menos favorable que a otras, a causa de sus características de nacimiento u otras consideraciones que parecen tener poca relación con los beneficios que esa gente podría recibir, o con las cargas que sería lógico esperar que soportara, surge la sospecha de que los funcionarios en el cargo estén actuando por simple prejuicio y bajo suposiciones de estereotipos sobre el valor y el comportamiento de las personas, en lugar de trabajar por el logro de metas públicas claramente lícitas.

Sin embargo, más allá de esos principios, el grado en el cual las calificaciones de grupo son percibidas como injustas —y, por ende rechazadas— depende en gran medida de las actitudes sociales prevalentes. Cuando los grupos elegidos como objetivo son una minoría numérica de la población de la sociedad, tienen rasgos físicos distintivos o estilos de vida que los demás juzgan extraños y poco atractivos, si por largo tiempo han estado sujetos a cargas invalidantes con la anuencia del gobierno o si profesan creencias y prácticas políticas o religiosas heterodoxas, la resistencia social al cambio es muy fuerte y la asimilación cabal de esos grupos a la sociedad puede parecer imposible.

El maltrato a las minorías y otros grupos no es exclusivo de los sistemas autoritarios cuyo respeto por el estado de derecho es escaso o nulo. En la década de 1960, los británicos, a pesar de su añeja tradición de adhesión a los principios democráticos y la equidad esencial, no tuvieron más remedio que mirar con ánimo crítico la forma en que trataban a las poblaciones de inmigrantes no blancos. Más aún, es obvio que la lucha histórica en torno a la esclavitud y sus vestigios ha figurado entre los hechos jurídicos y sociales más profundos de la experiencia de los EE.UU.

Incluso cuando una nación decide poner fin a la discriminación contra las minorías raciales u otros grupos desfavorecidos, tiene que responder una serie de interrogantes acerca de cuál será la forma apropiada de aliviar la situación. ¿Las políticas contra la discriminación sólo serán obedecidas por los funcionarios del gobierno? ¿O se deberán aplicar también a personas e instituciones privadas? ¿Será suficiente acabar con la discriminación denunciada? ¿O habrá que corregir los efectos de las desigualdades del pasado; por ejemplo, dando un trato preferente a los miembros de los grupos desfavorecidos que buscan empleo, mejores puestos de trabajo, admisión a escuelas superiores y otros beneficios? En suma, ¿las desigualdades del pasado engendran derechos en el futuro? Si es así, ¿los beneficios deben ser sólo para las personas que sufrieron la discriminación en el pasado o se tendrán que conceder a todos los miembros de ese grupo en especial?

La discriminación: una afrenta para una sociedad democrática

Virtualmente en toda su historia, Estados Unidos se ha visto obligado a confrontar ese tipo de cuestiones para resolver gran variedad de asuntos que afectan a las minorías y a otros grupos desfavorecidos, desde la penosa lucha contra la esclavitud y sus vestigios, y la expansión de los principios de igualdad en el país contra la discriminación de género y otras de tipo no racial, hasta los intentos de definir y garantizar un campo de juego competitivo y nivelado para la población discapacitada, o los esfuerzos recientes para que la orientación sexual se incluya entre los derechos del individuo a lo confidencial protegidos por la ley.

Varios temas básicos han impregnado todos y cada uno de esos movimientos. El primero es la idea de que ciertas formas de discriminación son una afrenta al concepto mismo de la sociedad abierta y democrática. El presidente John F. Kennedy evocó con elocuencia este principio en su

discurso a la nación a raíz de la integración de la Universidad de Alabama, por orden de la corte en 1963, contra la oposición del gobernador segregacionista del estado, George Wallace. Esa tarde, el presidente dijo: “Espero que todos los estadounidenses, no importa dónde vivan, examinen su conciencia sobre éste y otros incidentes de ese tipo. El país fue fundado por gente de muchas naciones y orígenes. Fue creado sobre el principio de que todos los hombres han sido creados iguales y que los derechos de todos sufren menoscabo cuando los derechos de un hombre son amenazados”.

Más tarde en ese verano, Martín Luther King, Jr., el líder más importante de los derechos civiles en aquella época, expresó en forma conmovedora otro de los lemas básicos del movimiento por la igualdad, en su discurso “Tengo un Sueño”, que fue el clímax de la marcha a Washington realizada en ese año a favor de los derechos civiles. Al hablar ante una multitud de 200.000 personas en el monumento al presidente Abraham Lincoln, quien firmó la proclamación de la emancipación que puso fin a la esclavitud, el Dr. King lamentó la falta de equidad de una sociedad donde la política pública y la práctica privada se basan en estereotipos sobre el valor de los seres humanos. “Tengo el sueño”, proclamó King, “de que mis cuatro hijos pequeños vivirán un día en una nación en la que no serán juzgados por el color de su piel, sino por la firmeza de su carácter”.

Por último, los movimientos en defensa de minorías de otros grupos desfavorecidos han sido motivados por consideraciones prácticas basadas en el interés propio y han ganado apoyo a partir de él. Si a una sociedad se le permite discriminar a cierto tipo de personas, ¿qué podrá impedir que lleve también a la práctica sus demás prejuicios? Muchos ciudadanos se percatan de que la discriminación contra los miembros de una raza, religión, origen étnico o práctica u orientación heterodoxa puede conducir a ataques contra otros grupos escogidos.

La campaña contra la esclavitud

Bajo la influencia de esas inquietudes, Estados Unidos ha amplia-



do poco a poco los tipos de discriminación que ya no está dispuesto a tolerar y ataca en la arena judicial, legislativa y ejecutiva, y también en el tribunal de la opinión pública. La campaña contra la esclavitud y sus vestigios ha sido la más frustrante y larga de todas. Cuando el país festejaba el bicentenario de la creación de su Constitución, en los años 80, Thurgood Marshall, elegido en 1967 como el primer afro-estadounidense que llegó a ser miembro de la Corte Suprema de la nación, declaró que la gente de su raza tenía pocos motivos para aplaudir la promulgación de la Constitución original. Lejos de eso, dijo Marshall, los afro-estadounidenses deberían reservar sus elogios para la 13^a, 14^a y 15^a Enmiendas a la Constitución, los decretos de la Guerra Civil y de la época de la Reconstrucción en contra de la esclavitud y la discriminación en el voto y otras esferas de la vida nacional.

Se puede argumentar que el magistrado Marshall acertó en muchos aspectos. Después de todo, la Constitución original de 1787 dispuso que un esclavo contara como tres quintas partes de una persona al determinar la población de cada estado y, por ende, el número de sus delegados en la Cámara de Representantes, es decir, la cámara baja del Congreso nacional. La Constitución contenía también una disposición que prohibió hasta 1808 la aprobación de cualquier enmienda o estatuto que restringiera la importación de esclavos, y garantizó a los dueños de éstos la devolución de los esclavos fugitivos, aunque éstos hubieran huido a estados donde la esclavitud estuviera proscrita por la ley. Más aún, en vísperas de la sangrienta Guerra Civil de la nación por la causa de la esclavitud y otros temas conexos, la Corte Suprema resolvió, en el caso *Dred Scott vs. Sandford* (1857) que los afro-estadounidenses, libres o esclavos, no eran ciudadanos de los EE.UU. y estaban excluidos de los derechos que la Constitución otorga al ciudadano.

Después de la Guerra Civil, el Congreso aprobó y los estados ratificaron una serie de enmiendas a la Constitución, a fin de garantizar todos los

derechos de ciudadanía a los ex esclavos liberados durante la guerra por medio de la Proclamación de Emancipación del presidente Lincoln en 1863. La disposición clave de la 14^a Enmienda, ratificada en 1868, es: “Ningún estado formulará ni pondrá en vigor ley alguna que menoscabe los privilegios o prerrogativas de los ciudadanos de los Estados Unidos; así mismo, ningún estado podrá privar de la vida, la libertad o la propiedad a una persona, sin el debido proceso de ley; tampoco podrá negar la protección de las leyes en un plano de igualdad a persona alguna en su jurisdicción”.

La aprobación y aplicación inicial de esas enmiendas de la Reconstrucción sólo puso un alto parcial y temporal a la discriminación contra las minorías en los EE.UU. En el ejercicio de sus facultades para poner en vigor las disposiciones de las enmiendas, el Congreso aprobó varios estatutos importantes sobre derechos civiles. La Ley de derechos Civiles de 1875, por ejemplo, prohibió la segregación o discriminación racial en transportes públicos, hoteles y teatros. No obstante, aun el Congreso que aprobó la 14^a Enmienda autorizó la segregación en las escuelas de Washington, D.C., la capital de la nación. Más aún, a medida que el entusiasmo nacional por la Reconstrucción fue decayendo en las décadas de 1870 y 1880, la Corte Suprema interpretó con demasiada estrechez o, alegando inconstitucionalidad, suprimió esas leyes de derechos civiles que el Congreso había adoptado.

Ascenso y caída de las leyes sobre la segregación

La Corte Suprema posterior a la Reconstrucción concedió también el peso de su aprobación a las leyes sobre la segregación. En el caso *Plessy vs. Ferguson* (1896), la Corte respaldó la autoridad de los estados para requerir la segregación racial en vagones de ferrocarril y otras instalaciones públicas y privadas, siempre que a los segregados se les acomodara en otro sitio “igual”. La conclusión de la mayoría fue que las leyes de segregación afectaban a blancos y negros por igual y no infligían un estigma de inferioridad a ninguna

de las razas. Los estados podían resolver también, con apego a la razón, que esas leyes eran necesarias para fomentar la paz y el orden público.

Sólo estuvo en desacuerdo el magistrado John Marshall Harlan, quien había sido dueño de esclavos en Kentucky. Harlan se burló de la idea que compartía la mayoría, según la cual las leyes de segregación daban el mismo trato a los miembros de la raza blanca dominante y a los ex esclavos, y dijo que a su juicio, bajo las enmiendas de la Reconstrucción, “nuestra Constitución es daltónica y ni conoce ni tolera [divisiones de] clases entre los ciudadanos. En lo que toca a los derechos civiles, todos los ciudadanos son iguales ante la ley”. La complicidad de la Corte al permitir que los estados mantengan a los afroestadounidenses en situación de casi esclavitud, auguró Harlan, “será al cabo del tiempo tan perniciosa como la resolución de este tribunal en el Caso Dred Scott”.

La doctrina de “separados pero iguales”, tomada del caso *Plessy*, persistió como el debido procedimiento legal y sólo las formas más flagrantes de discriminación racial fueron objeto de alguna condena ocasional en los tribunales. Sin embargo, en las décadas de 1930 y 1940, la Corte Suprema empezó a contemplar con una mirada más crítica las leyes de segregación y otras formas conexas de discriminación racial. La célebre opinión de Fiske Stone ante la Corte, acerca de la nota cuatro al pie de página dirigida al magistrado Harlan en el caso *United States vs. Carolene Products Co.* (1938), incluyó entre las leyes que podían ser sometidas a estricta revisión judicial “el prejuicio contra minorías definidas y aisladas”. A pesar de que la Corte adujo la necesidad militar para mantener las sanciones de la Segunda Guerra Mundial contra los estadounidenses de origen japonés, el magistrado Hugo L. Black recalcó ante la mayoría que “todas las restricciones jurídicas que coartan los derechos civiles de un solo grupo racial son sospechosas de inmediato”. En sus veredictos más significativos de esa época, la Corte empezó a suprimir la segregación en la educación de



postgrado y profesional. En el caso *Sweatt vs. Painter* (1950) no sólo concluyó que una escuela estatal de derecho creada en fecha reciente para los negros era inferior a la escuela de derecho de la Universidad de Texas exclusiva para los blancos, sino resolvió también que al determinar si las escuelas segregadas eran iguales a las otras, los tribunales debían tomar en cuenta factores intangibles, además de los tangibles: “esas cualidades [como el prestigio de la institución] que no es posible medir de modo objetivo, pero que constituyen la grandeza de una escuela de derecho”.

Impulsados por el rigor de la interpretación de la Corte en este caso, acerca de la doctrina “separados pero iguales”, Thurgood Marshall, quien era a la sazón el abogado de la Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color (NAACP), y otros defensores de los derechos civiles deci-



dieron que había llegado el momento de impugnar la doctrina misma, sobre todo el supuesto de que las instalaciones segregadas podían ser iguales a las otras. Al cabo de un largo litigio, la Corte Suprema aceptó esta posición el 17 de mayo de 1954.

Según la opinión unánime del tribunal en el caso *Brown vs. Junta de Educación* y otros conexas, el presidente de la Corte Suprema Earl Warren concluyó que la asistencia a las escuelas segregadas por orden judicial creaba en los

niños de la minoría un sentimiento de inferioridad que afectaba adversamente su capacidad de aprender. Así pues, la educación en esas escuelas nunca sería igual que en las otras, ni cumpliría con los requisitos de la garantía de “igual protección” de la 14ª Enmienda. En un segundo fallo unánime pronunciado al año siguiente, en el caso *Brown II*, Warren, el presidente de la Corte Suprema, dio instrucciones a las cortes menores y a las juntas escolares para que procedieran a implementar la integración en las escuelas públicas con “deliberada celeridad”.

Antes que el presidente Warren de la Corte Suprema se retirara, en 1969, ese tribunal y las cortes menores ya habían impugnado también la segregación en otras esferas de la vida nacional, e incluso una ley del estado de Virginia que prohibía el matrimonio entre personas de distinta raza. Bajo las presidencias de Warren Burger (1969-86) y William H. Rehnquist (1986-), la Corte Suprema ha aprobado amplias facultades remediadoras para los jueces en demandas de integración en escuelas, incluso la orden judicial de que los estudiantes viajaran juntos en los autobuses para asegurar la integración de las escuelas en barrios racialmente segregados, y la imposición de cuotas raciales en la composición del estudiantado y el personal administrativo. Sin embargo, los magistrados han hecho una clara distinción entre la segregación *de jure* (oficial) y la segregación *de facto* (que sólo es resultado de patrones de vivienda segregada), y sostienen que a esta última no la prohíbe la Constitución. Por mayoría de votos, se ha ordenado que las cortes de justicia levanten los decretos de integración en cuanto se logre un grado sustancial de cumplimiento en la conversión de un sistema escolar de dos razas en un sistema unitario. Por último, la Corte ha dispuesto que la aplicación de la garantía de “igual protección” de la 14ª Enmienda se limite a las políticas que tienen una intención discriminatoria y no sólo un impacto racialmente desigual.

Al igual que el sistema de tribunales de los EE.UU. fue a la vanguardia en muchas formas

para el logro de la igualdad racial, la Casa Blanca y el Congreso han creado también notables salvaguardias contra ese tipo de discriminación. A raíz del rechazo nacional a los choques violentos de la policía contra los defensores de los derechos civiles que participaban en las marchas de Birmingham, Alabama, el gobierno de Kennedy propuso una legislación de amplio alcance sobre derechos civiles, que el presidente Lyndon B. Johnson impulsó a través del Congreso después del asesinato del presidente Kennedy en 1963. Legislada bajo la autoridad del Congreso para regular el comercio interestatal y ejecutar las disposiciones de la 14ª Enmienda, la Ley de Derechos Civiles de 1964 prohibió la discriminación racial y otras formas conexas de discriminación en el alojamiento público, el empleo y los programas financiados con fondos federales. La aplicación de la última disposición fue más eficaz que cualquier orden judicial para acelerar el proceso de integración de las escuelas públicas. A raíz de la violencia registrada contra los que marcharon a favor de los derechos humanos en Alabama, el Congreso legisló la Ley de Derechos de los Votantes de 1965, proscribiendo los exámenes de analfabetismo y otros que se aplicaban a los votantes en los estados con antecedentes de discriminación en el registro de electores, y se exigió que esos estados obtuvieran la "autorización previa" de funcionarios federales para promulgar nuevas leyes electorales. El estatuto de 1965 dio lugar a un enorme aumento en el registro de votantes afro-estadounidenses en los estados del Sur y la disminución correspondiente del uso de exhortaciones racistas en la arena política. Más aún, por medio de la Ley de la Vivienda Justa de 1968, el Congreso dispuso que se suprimiera la discriminación en la mayoría de las transacciones sobre vivienda.

Los derechos de todas las minorías

Por supuesto, los afro-estadounidenses no han sido los únicos que han sufrido discriminación en los Estados Unidos. La historia del trato que este país ha dado a los norteamericanos nativos es igual-

mente lamentable. Durante años, el Congreso y los tribunales promovieron la expansión hacia el Oeste a expensas de los derechos de propiedad de los indígenas, confiscando sus tierras y aislándolos en reservas, a menudo en precarias condiciones de vida.

Empero, a la postre se concedió la ciudadanía y el derecho de voto a los indios. Además, a partir de la década de 1960 se movilizaron grupos indígenas de derechos civiles y obtuvieron victorias notables en la defensa de sus derechos sobre la tierra, la caza y la pesca, y aun en la protección de sus sitios funerarios y otros lugares sagrados. No obstante, en un caso importante ventilado en 1990, la Corte Suprema se negó a conceder su protección al uso ritual del peyote por algunas tribus, y concluyó que en los ritos religiosos es preciso acatar leyes penales que son neutrales en el aspecto religioso, como la regulación sobre drogas.

Aun cuando no son una minoría numérica en la población de la nación, las mujeres estadounidenses, como las de la mayoría de los países, han estado sometidas por tradición a gran variedad de impedimentos basados en suposiciones sobre el género. Antes de la adopción de la 19ª Enmienda a la Constitución de los EE.UU. en 1920, los tribunales admitían en forma rutinaria las leyes estatales que negaban a la mujer el derecho de voto. Un buen número de las resoluciones más antiguas se basaron en las leyes que prohibían a la mujer el ejercicio del derecho, la medicina y otras profesiones. De hecho, todavía en 1961, la Corte Suprema invocó una ley de Florida que excluía a la mujer del servicio en la judicatura, a menos que expresaran en forma específica su deseo de servir. Sin embargo, el sexo difícilmente parece ser más relevante que la raza, como una base justa para la distribución de los beneficios y las cargas del gobierno. Igual que los afro-estadounidenses, las mujeres fueron excluidas larga y sistemáticamente del proceso político y, por ende, de la oportunidad de tener el control de su propio destino.

A partir de consideraciones de

ese tipo, el Congreso incluyó el género entre las formas de discriminación en el empleo que prohíbe la Ley de Derechos Civiles de 1964. El título IX de las Enmiendas Educativas de 1972 prohibió la entrega de fondos federales a las escuelas que discriminen a sus estudiantes del sexo femenino. En ese mismo año y bajo la presión de la Organización Nacional para la Mujer (NOW por sus siglas en inglés) y otros grupos, el Congreso propuso a las legislaturas estatales la ratificación de la Enmienda sobre la Igualdad de Derechos (ERA), disponiendo que la "[i]gualdad de derechos bajo la ley no sea denegada ni coartada a causa del sexo, por el gobierno de los Estados Unidos o por el de cualquiera de los estados", y confiriendo además al Congreso la facultad de ponerla en vigor. A la postre, la ERA no logró obtener la aprobación del número de estados requerido y la Corte Suprema se ha negado, en general, a equiparar las clasificaciones de género con las que se refieren a la raza. Sin embargo, la Corte descartó por primera vez una ley sexualmente discriminatoria en 1971, basándose en el principio de "igual protección", y muy pocos años después, la Corte concluyó por mayoría de votos que las leyes basadas en el género eran "casi sospechosas" y sólo debían ser invocadas con validez si tenían un vínculo sustancial con intereses importantes del gobierno. En vista de que sólo las mujeres pueden quedar embarazadas, el controvertido derecho de aborto reconocido en el caso *Roe vs. Wade* (1973) es interpretado también por muchas mujeres como una salvaguardia contra la discriminación basada en el género y como una garantía del derecho individual a lo confidencial.

En términos generales, Estados Unidos ha sido más renuente a prohibir la discriminación basada en la orientación sexual o a reconocer el derecho de los adultos a tener relaciones homosexuales por voluntad propia. Un buen número de ciudades, condados o estados han incluido la preferencia sexual entre las formas de clasificación prohibidas, y unos cuantos han llegado al extremo de reconocer el matrimonio entre homosexuales. En el caso *Romer*

vs. *Evans* (1996), una mayoría de 6 a 3 en la Corte Suprema esgrimió la tesis de “igual protección” para descartar una enmienda a la constitución estatal que prohibía todas las regulaciones actuales y futuras encaminadas a proteger a las personas de la discriminación basada en la preferencia sexual. Aun cuando no accedió a declarar a los homosexuales como una clase amparada por protección especial, la Corte condenó la enmienda como un inaceptable intento del estado de relegar a los homosexuales a la categoría de ciudadanos de segunda clase.

En 1971, la Corte de Burger declaró que la extranjería—condición jurídica en la que se hallan los inmigrantes ilegales— es constitucionalmente sospechosa y prometió someter a una revisión judicial estricta las leyes que hacen distinción entre los ciudadanos y los no ciudadanos de los EE.UU. En decisiones posteriores rechazó leyes que concedían beneficios públicos sólo a los ciudadanos. Al mismo tiempo, los magistrados han aclarado que la promulgación de leyes federales que hagan distinciones entre ciudadanos y extranjeros será digna de mayor atención que la de sus homólogas estatales. Así mismo, reconocieron una excepción a la propuesta general de dar el mismo trato a ciudadanos y no ciudadanos, pues apoyaron varios reglamentos por los cuales los empleos públicos se deben reservar sólo para los ciudadanos.

Desde la Segunda Guerra Mundial, los veteranos y otros estadounidenses discapacitados han cabildeado en el Congreso en busca de protección contra la discriminación basada en esos impedimentos. En 1990, una coalición comprometida con esa legislación convenció al Congreso de aceptar la Ley sobre Estadounidenses Discapacitados (ADA por sus siglas en inglés). Después de definir a la persona discapacitada como la que padece una deficiencia física o mental que limita una o más de sus “actividades vitales”, la ley garantiza a esas personas el acceso a instalaciones públicas, oportunidades de empleo y servicios de comunicaciones, al tiempo que obliga a los empleadores y otros a hacer las adaptaciones necesarias para garantizar el logro de las metas de dicha ley. La ADA ha



avanzado un gran trecho hacia la reducción de los obstáculos que los minusválidos encuentran en el empleo, la educación y otros entornos. Sin embargo, la Corte Suprema ha interpretado estrictamente esas disposiciones en algunas de sus resoluciones. Por ejemplo, en un caso de 1999, concluyó por mayoría que la ADA no podía obligar a una aerolínea a contratar pilotos miopes, a pesar de que su defecto pudiera corregirse.

El debate en torno a la acción afirmativa

Bajo Burger y Rehnquist, la Corte se ha enfrentado también a un asunto de discriminación que la Corte de Warren no estuvo obligada a confrontar, es decir, el contencioso debate sobre “la acción afirmativa”. En su afán de remediar los efectos de los prejuicios del pasado contra minorías raciales y mujeres, en el empleo y en la educación superior, varias agencias del gobierno y universidades han creado desde los años 60 una serie de programas que dan diversos grados de preferencia a las minorías y a las mujeres en las decisiones sobre admisiones, empleos y oportunidades de progreso. Los partidarios de esos programas han dicho que no son más que medidas temporales para garantizar un trato justo a los miembros de grupos que han estado sometidos a discriminación intencional a lo largo de la historia, y hacer más expedita la creación de una sociedad realmente integrada. Los partidarios de la acción afirmativa subrayaron, además, que cuando los varones blancos, las supuestas víctimas de esos programas, se quejaron de una “discriminación inversa”, este grupo tan bien establecido difícilmente se podía comparar con el de los afro-estadounidenses y con otros que por largo tiempo han estado sometidos a maltrato a causa de su raza o color y que, por lo tanto, hoy son merecedores de protección judicial especial. Además de argumentar que los programas de acción afirmativa eran una “discriminación inversa” anticonstitucional, los críticos adujeron que dicha acción era contraria al

concepto de la Constitución “daltónica”, transgredía el principio del progreso basado en los méritos, agravaba las pugnas raciales y, tal vez, generaba sentimientos de inferioridad en las personas a las que pretendía ayudar.

La reacción de la Corte Suprema a las demandas judiciales que impugnan los programas de acción informativa ha sido ambigua. En su primer caso importante, *Miembros de la Junta Directiva de la Universidad de California vs. Bakke* (1978), la Corte se encontró con un sistema de cuotas en el que 16 de las 100 plazas de primer año estaban reservadas para solicitantes miembros de minorías, en una escuela estatal de medicina. El magistrado Lewis Powell, quien expresó la opinión principal en el proceso, tuvo un papel en verdad crucial en el fallo de la Corte. Hablando en su nombre y el de otros cuatro magistrados, Powell rechazó la cuota impugnada. Según la conclusión del magistrado, todas las clasificaciones raciales estarían sujetas a un estricto escrutinio judicial, no importa cuál sea la raza afectada; y ningún interés convincente podía justificar una política de admisiones basada sólo en la raza. No obstante, Powell y un grupo de otros cuatro magistrados sostuvieron también que el interés de un estado por asegurarse una población estudiantil diversa era un motivo lo bastante convincente para justificar que la raza sea tomada en cuenta, junto con otros factores, en las decisiones sobre la admisión de estudiantes.

En el caso *Trabajadores siderúrgicos vs. Weber*, juzgado al año siguiente, la Corte Suprema apoyó por mayoría la decisión conjunta de una compañía y su sindicato de trabajadores, por la cual concederían el 50 por ciento de ciertas plazas a miembros de minorías, hasta que el porcentaje de éstas entre los trabajadores se aproximara a la proporción que corresponde a las mismas en la fuerza de trabajo de la región. Brian Weber, el trabajador blanco que impugnó la cuota de la compañía, alegó en primer lugar que ésta violaba las disposiciones de la Ley de Derechos Civiles de 1964 contra la discriminación en el empleo. A pesar de todo, la Corte concluyó por mayoría que la in-

tención de la legislación no era impedir la decisión voluntaria de una compañía que opta por aplicar una cuota racial a fin de corregir los efectos de la discriminación en el empleo ejercida en el pasado, en una región determinada.

La oposición reciente de la Corte a la acción afirmativa se ha extendido también al proceso de elección. En el caso *Shaw vs. Hunt* (1996) y en otros veredictos, la Corte permitió que los votantes blancos impugnaran a los distritos del Congreso conocidos como de mayoría-minoría, a partir de los cuales se elige a los miembros de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos. Bajo la presión del Departamento de Justicia, después del censo nacional de 1990, varios estados habían creado distritos en los que los estadounidenses de origen africano o hispano eran la mayoría de los electores; en esos distritos, los candidatos de minorías tenían más probabilidades de ser elegidos al Congreso. En cierto modo, la Corte ha favorecido a esos distritos especiales al afirmar la constitucionalidad de las enmiendas hechas en 1982 a la Ley de Derechos de los Votantes de 1965. Según esas enmiendas, las leyes electorales son inválidas no sólo cuando tienen un propósito discriminatorio, sino también cuando su efecto consiste en debilitar la posibilidad de que los votantes pertenecientes a minorías elijan a los candidatos de su preferencia. Sin embargo, por escasa mayoría, la Corte Suprema ha concluido también que los distritos de mayoría-minoría son inconstitucionales si el fin para el cual se esta-

blecen es la meta eminentemente racial de asegurar la elección de candidatos de una minoría.

El credo de la igualdad individual

La lucha por poner fin a la discriminación contra las minorías en los Estados Unidos se ha desarrollado, sobre todo, en los tribunales de justicia, en las legislaturas estatales y en el Congreso. Estos esfuerzos han tenido éxito por dos razones. Una de ellas es el estado de derecho y la convicción predominante del pueblo estadounidense de que, aun cuando un individuo o grupo no esté de acuerdo con las conclusiones de los tribunales o las legislaturas al crear políticas, los ciudadanos están obligados a obedecer esas políticas. Si no están de acuerdo con una política o una ley, cabildan en las legislaturas e interponen demandas en las cortes, en vez de causar alborotos en las calles.

La segunda razón es que la religión cívica de los Estados Unidos, tal como está contenida en la Constitución, la Declaración de Independencia y una larga tradición de legislaturas y tribunales, sostiene que todas las personas han sido creadas iguales y tienen derecho al

mismo grado de protección bajo la ley. Aun en caso de que a algunos estadounidenses, en forma individual, no les agraden determinados grupos por el color de su piel, su estilo de vida o su idioma, el credo generalizado de la igualdad de los individuos obliga a los norteamericanos a confrontar sus propios prejuicios. Pese a que la nación no se ha librado aún de su historia de discriminación contra ciertos grupos, a la postre se ha comprometido públicamente a poner fin a todos los vestigios de prejuicios raciales y de otro tipo.

A pesar de que estas dos convicciones –del estado de derecho y de la igualdad individual– pueden estar muy relacionadas con la experiencia histórica de los Estados Unidos, la regla general es aplicable en todas partes: los individuos deben ser tratados en un plano de igualdad bajo la ley. Si no es así, la nación se estará exponiendo a un conflicto civil. ■

Para lecturas adicionales

Charles A. Lofgren, The Plessy Case (Oxford, 1987)

Richard F. Kluger, Simple Justice: The History of Brown v. Board of Education and Black America's Struggle for Equality (Knopf, 1976)

J. Harvie Wilkinson, III, From Brown to Bakke (Oxford, 1979)

Deborah Rhode, Justice and Gender (Harvard, 1989)

Andrew Kull, The Color-Blind Constitution (Harvard, 1994)

